

REPORTAJE

Pese a que en enero de 1994 El Salvador fue declarado por el Gobierno "territorio libre de minas", tras una campaña de detección y destrucción de éstas, el estallido de minas antipersonales y otros artefactos explosivos abandonados desde la guerra continúa, y la lista de víctimas del conflicto sigue creciendo nueve años después. En julio próximo, una organización inglesa iniciará un proyecto de desminado en un área de 150 kilómetros cuadrados en los que se sospecha que la muerte aún acecha.

La muerte a flor de tierra

ANA LIDIA RIVERA

La tragedia pasó inadvertida para la mayoría de salvadoreños, pero Valentina Hernández de Rivera, de 37 años, madre de dos de los tres niños que murieron por el estallido de un artefacto explosivo el pasado 27 de febrero, en el cantón El Carrizal, en la jurisdicción de San Simón, en el oriental departamento de Morazán, no está dispuesta a olvidar.

Valentina, en la actualidad madre de ocho pequeños, recuerda esa fecha como la peor de su vida. Mientras amamanta a Pedro Antonio, de diez meses, se enjuga las lágrimas y trae a su memoria las últimas imágenes de sus dos hijos, Salvador, de 16 años, y Santos Claro, de 12, y la de su sobrino, Jesús Franco Orellana, de 11. "Me abrazaron y me besaron al irse como si se estuvieran despidiendo", dice la mujer con la mirada perdida en las labores cotidianas.

La quebrada El Caracol, el lugar de la tragedia, se encuentra a pocos metros de la choza de adobe donde vive la familia Hernández Rivera. Los niños acudían a menudo al lugar para buscar "canechas", o cangrejillos de quebrada, pero esa mañana encontraron la muerte. Se cree que Santos Claro, el menor de los dos hermanos, fue quien activó el explosivo al hurgar debajo de una de las piedras de la quebrada, porque su cuerpo fue encontrado con el brazo derecho mutilado. Con la explosión, las rocas se convirtieron en lacerantes esquivadas que alcanzaron a su hermano y a su primo. No hubo más.

A casi tres meses de lo ocurrido, aún no existe en la zona ningún tipo de señalización que advierta a los vecinos sobre la posible presen-



Valentina Hernández de Rivera observa la tumba de sus hijos en el cementerio del cantón El Carrizal, en la jurisdicción de San Simón, Morazán.

cia de explosivos en el sector. "Yo les digo a mis vecinos que cuiden de sus hijos, porque duele en el alma ver cómo quedan de destrozados", afirma Valentina, frente a la humilde tumba donde yacen los cuerpos de sus hijos.

ENEMIGO INCIERTO

En Nicaragua, el control exhaustivo que el Ejército llevó de las minas dispuestas en su territorio, durante el conflicto armado que vivió en los años 80, permite asegurar que fueron unas 160 mil. En El Salvador, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuántas minas fueron instaladas por los bandos enfrentados. Esto, sin duda, dificultó en gran medida que los distintos programas antiminas desarrollados, conocidos como PAM I y II, y ejecutados por organizaciones extranjeras con financiación del Gobierno y la comunidad internacional, casi inmediatamente después de firmados los Acuerdos de Paz, no hayan tenido la efectividad deseada y que la amenaza siga latente.

Para complementar esta tarea, expertos militares ingleses del Grupo Internacional de Desminado, (IDG, por sus siglas en inglés) llegaron por primera vez al país el 28 de julio de 1998. En esa fecha, el IDG comenzó a evaluar la persistencia de la amenaza de minas y artefactos no detonados. Su director, Graeme Goldsworthy, que a finales de abril visitó El Salvador para la firma de un acuerdo de cooperación de desminado con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH), sostiene que sólo en el departamento de Cuscatlán su Organización No Gubernamental

REPORTAJE

(ONG) ha localizado 53 zonas de riesgo en un área que se aproxima a los 150 kilómetros cuadrados, y que abarca los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, Usulután, San Vicente, San Salvador, La Paz y La Libertad.

"Pese a ello", dice Goldsworthy, "el IDG no cree que la amenaza de reductos de minas y artefactos explosivos no detonados en el país constituyan, de momento, una emergencia. En realidad, sin un reestudio detallado del terreno, ésta es una situación difícil de determinar".

Parapoderhacerlo, la organización inglesa iniciará en julio próximo una fase piloto de un año en la que pretende recabar, in situ, toda la información pertinente posible, con el apoyo de las distintas comunidades de estas zonas. Esta fase piloto vendrá seguida de otras dos en las que se tratará de fortalecer la capacidad de gestión de las ONG que trabajan de cerca con la población de estos lugares. Otros departamentos potenciales beneficiarios del proyecto son San Miguel, Morazán (Perquín) y Usulután.

Para el caso, en las regiones atendidas por la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), IDG creará un equipo de gestión para el componente de Acción de Desminado. Esto es porque IDG fue formado específicamente para abordar la necesidad de realizar acciones humanitarias de desminado en áreas de desarrollo. "Llevar la remoción de minas a la esfera de la actividad del desarrollo, incorporada dentro de una ONG de desarrollo local, capaz y con reconocimiento internacional como lo es CORDES, es una de nuestras

funciones", señala.

El representante de CORDES para los departamentos de Cuscatlán y Cabañas, Héctor Martínez, se muestra confiado del éxito del programa, ya que es la propia población en riesgo la que apoyará con información las acciones del IDG. Sin embargo, reconoce los riesgos adicionales que esto pueda acarrear: "Más de alguno se puede ver atemorizado por la reacción de grupos interesados en mantener en secreto, para el caso, la ubicación de depósitos ilegales de armas", dice Martínez, en referencia a las bandas delincuenciales que operan en la zona y mantienen, según él, el control de estos arsenales, en muchos casos también heredados del conflicto armado.

El año pasado, el IDG entregó a la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC), 28 minas de presión anti-personales de manufactura casera activas, dos minas Booby Trap activas, una granada de mano improvisada, un cohete aire-tierra, un mortero redondo de 64mm, dos trampas de fabricación casera con comando de destrucción fragmentaria de carga C4 activas y una mi-

EL LLANTO EN LA QUEBRADA

DOS FAMILIAS PERDIERON A SUS HIJOS EN EL CANTÓN EL CARRIZAL, EN MORAZÁN. HASTA AHORA, NADIE SE HA ACERCADO A ELLAS PARA BRINDARLES NINGÚN TIPO DE AYUDA DESPUÉS DE LA VIOLENTA DESAPARICIÓN DE SUS PEQUEÑOS. LA QUEBRADA DONDE ENCONTRARON LA MUERTE YA NO ES VISITADA POR CASI NADIE. LOS VECINOS DICEN QUE, CUANDO SE CRUZAN POR ELLA, SE ESCUCHA EL LLANTO DE LOS NIÑOS.



La vida arrebatada. Esta es la única foto que poseen los padres de Santos Clara Rivera Hernández. Junto a él murieron su hermano y un primo, por el estallido de un artefacto explosivo.



PELIGRO LATENTE

Muchas personas mueren al manipular, por desconocimiento, los diversos explosivos que en apariencia están inservibles.



Granada F-1 (origen Rusia)

Varios modelos

Los modelos de granada que con mayor frecuencia se localizan son la M-67, de manufactura norteamericana y la FMK-2 MO de fabricación argentina según reportes de la División de Armas y Explosivos de la PNC.



Manom-26 A2 (de mano) | HG-80 mini (origen Austria) | M-67 (origen EEUU) | FMK-2 MO (origen Argentina)



Granada 51 mm (de fragmentación)

Granada 81 mm (de fragmentación)

Se han encontrado minas oxidadas pero aún activas lo que las hace peligrosas.

ZONAS DE RIESGO

Las zonas de mayor riesgo se ubican al norte de al menos siete departamentos. Entre los que se encuentran:

San Salvador

En la región norte de este departamento con frecuencia son localizados tatus (escorridites) en los que se encuentran fusiles automáticos, munición, cohetes, granadas, y minas. Muchos de estos están en posesión de bandas.

Cabañas

Pobladores de 16 cantones en esta región viven con la amenaza permanente del estallido de minas y artefactos.

Chalatenango

Las zonas de riesgo en este departamento se encuentran en una veintena de cantones y caseríos.

Morazán

Al norte de este departamento se dió el último estallido de explosivos. Tres menores perecieron en este incidente.

San Vicente

El delta del Río Lempa, en San Vicente, está considerado como área contaminada por minas.

Usulután

En la zona sur de este departamento también se han dado accidentes.

LARGA DURACIÓN

La vida útil de la mayoría de pertrechos explosivos, de origen industrial, según los expertos, puede prolongarse entre los 25 y 30 años, en algunos casos puede incluso extenderse hasta los 60 años.

1992	1994	2001	2052
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, expertos en desminado declararon inaccesible alrededor de 438 kms. cuadrados que afectaban a 7 de los 14 dptos.	Desde marzo de 1993 hasta enero de 1994 se habían desactivado unpromedio de 9511 minas eléctricas que afectaban de fabricación doméstica.	La mayor parte del armamento disperso se encuentra activado ya que estos fueron disparados por una carga propulsora en tiempos de guerra.	El riesgo de que el armamento militar se mantenga activo, puede en muchos casos llegar a los 60 años a pesar de su apariencia enmohecida.



Infografía EDH/Isaac De Coss

La población que localice este tipo de pertrechos no debe manipularlos, se recomienda señalar el lugar e inmediatamente informar a las autoridades policíacas más cercanas.

REPORTAJE

na química a presión activa. Todos estos artefactos estaban en condición operacional. Sólo en el caso de algunas de las minas, los detonadores estaban en mala condición.

CASOS AISLADOS

El recién nombrado jefe de la División de Armas y Explosivos de la PNC, subinspector Hugo Salinas, reconoce su total desconocimiento acerca del programa de desminado y destrucción de pertrechos que implementará en las próximas semanas IDG en coordinación con la PDDHH. Pese a que él es un convencido de que el país está libre de minas, acepta que se dan casos aislados de hallazgos de minas antipersonales y pertrechos militares: "Ya no hay programas formales, lo que hacemos en la actualidad son rastreos en zonas donde se ha tenido información por parte de la población sobre la presencia de explosivos abandonados". Según él, la mayoría de artefactos encontrados son fundamentalmente piezas de artillería (granadas de distinto calibre) y granadas de mano de origen industrial. "La gente por desconocimiento los manipula y los hacen explotar". De momento, la División realiza charlas preventivas dirigidas hacia la población estudiantil de las escuelas ubicadas en la zona rural, sobre todo en los lugares donde se libró la guerra. "Esto es para que se conozcan los artefactos de fabricación casera e industrial". Lo que se recomienda en estas charlas es que una vez ubicada una de estas piezas, no la toquen, que señalicen el lugar e inmediatamente avisen a la PNC. En cuanto a las minas Claymor, el Subcomisionado explica que éstas se continúan localizando pero sin sistema y sin dispositivo. El jefe policial describe además las limitaciones que padece su Unidad en cuanto a número de agentes para poder llevar adelante, por ejemplo, un barrido de terreno en la zona de Chalatenango. "Tenemos fuertes limitaciones tanto de hombres como de materiales. La División cuenta con tan sólo tres detectores de minas en muy mal estado", se lamenta.

Con todo y las limitaciones, la División de Armas y Explosivos lleva un registro bastante significativo sobre la localización y destrucción de minas y artefactos explosivos. El año pasado fueron recolectados 575 artefactos explosivos. De estos, 177 fueron destruidos y 398 fueron depositados en bodegas para su próxima destrucción en misiones de demolición. (ver cuadro).

NO ESTAMOS LIBRES DE MINAS

"Muchos han llegado a la conclusión de que el país está libre de minas, pero esto contrasta con la realidad", señala el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Marcos Alfredo Valladares, quien muestra su preocupación porque la población campesina es quien más se ve afectada en estos casos, "sobre todo los niños campesinos que nacieron después de finalizado el conflicto y no están familiarizados con este tipo de artefactos". Según él, éste se-



Las minas Claymor de origen industrial, como la que aparece en la fotografía, poseen enorme poder de destrucción. Se presume que algunas de ellas todavía se encuentran en diversos puntos del país.

FOTOS ENH/INFORMA

OTRO EXPLOSIVO, OTRAS MUERTES

"MI PAPÁ CREYÓ QUE LA PAPAYA YA NO SERVÍA Y POR ESO ME LA DIO PARA QUE JUGARA CON ELLA, MIENTRAS ÉL TRABAJABA"

Uno de los dos caballos llegó herido hasta el rancho después de que se escuchó una fuerte explosión en dirección de las alturas del Cerro El Pedernal, ubicado en la periferia del poblado de San Antonio Los Ranchos, en el departamento de Chalatenango. "Regresé corriendo al cerro y me encontré con mi papá en el camino, tirado en el suelo, todo herido pero todavía vivo". Al principio no encontrábamos al mozo que mi papá había contratado para que lo ayudara en el frijolero, pero más tarde, la Policía encontró partes de su cuerpo entre los chirriones", relata hoy, con aparente frialdad, Ramón Martínez, de 12 años.

Su padre, Marcial Martínez Marín, de 59 años y el hondureño, Domingo Reyes Pérez, de 26, fallecieron la tarde del 30 de octubre del año recién pasado por el estallido de una granada de mortero 81mm, cuando regresaban de laborar en un frijolero ubicado en el cerro El Pedernal.

Marcial Martínez, le dio la granada a su hijo para que jugara con ella pues según él esta ya no servía. "Estaba toda sucia y mojosa. La limpié con el machete y la lave", rememora Ramón. Más tarde, cuando llegó la hora de la comida, Marcial Martínez, mandó adelante a su hijo para que dijera a su esposa, María Gregoria Martínez, de 41 años, que les tuviera listo el almuerzo. Los dos campesinos comenzaron a descender de las alturas, trayendo consigo la granada de mortero, cuando estalló. Del campesino hondureño sólo quedaron pedazos de su cuerpo. Marcial aguantó un tiempo más pero murió cuando era trasladado en un pick-up hacia el hospital de Chalatenango. La única palabra que se le escuchó decir al campesino durante su corta agonía fue "bomba".

rá un problema que se mantendrá presente por varios años en el país. "Incluso en algunas naciones de Europa que fueron escenario de la Segunda Guerra Mundial se mantienen en la actualidad campañas de desminado" apunta.

Asegura que el impacto, además del daño físico, se extiende también a la esfera económica. La presencia de una mina implica forzosamente que la gente ya no trabaje esa tierra; "ya no la cultivan por temor". Otro de los graves problemas que giran en torno a esta situación es, en palabras del Procurador, "el olvido del tema del desminado". Una de las razones de este olvido podría ser, según él, la

poca cobertura que los medios de comunicación dan a este tipo de casos. Otra razón importante es la poca capacidad de denuncia de parte de la población. De hecho, los dos casos más recientes en los que cinco personas murieron por el estallido de artefactos explosivos en los departamentos de Chalatenango y Morazán no figuran en los expedientes de la PDDHH. Pese a todo, el funcionario muestra entusiasmo por el programa que impulsará el IDG, en el que su institución establecerá el nexo con las distintas instancias del Gobierno. Valladares espera que con el nombramiento del nuevo Procurador, el próximo dos de julio por parte de la

Asamblea Legislativa, se dé un fuerte impulso al tema.

EN LA TIERRA DEL OLVIDO

Cuando Vértice solicitó una entrevista con un diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, que supuestamente estaría en la discusión de una iniciativa de ley que permitirá la depuración del territorio salvadoreño de minas antipersonales, fue llamado un diputado de la Comisión de Economía, porque el encargado de Comunicaciones de ese partido entendió que se trataba del tema de Minas e Hidrocarburos. Esto y la experiencia que mostraron los diputados entrevistados sobre la iniciativa de ley, reflejan lo alejado que está el tema de la agenda política actual.

Blanca Flor Bonilla, del FMLN y Donato Vaquerano de ARENA, quienes participan en la Comisión de Relaciones Exteriores, coincidieron en decir que desconocían de la reunión efectuada en septiembre pasado entre miembros del Comité Interinstitucional de Derecho Internacional en El Salvador (CIDIH-ES) y el Comité Internacional de la Cruz Roja con los diputados de esa Comisión, en la cual se planteó la creación de esa iniciativa de ley. Ambos mostraron curiosidad en el tema y aseguraron que buscarían actualizarse sobre ello. Vértice buscó también la opinión de las autoridades de la Fuerza Armada, pero el encargado de prensa de la institución informó que ni el General Antonio Martínez Varela ni sus asesores podían atenderlos.

La ausencia total de este tema en la agenda de los políticos contribuye a que prácticamente nadie prepare en la atención de las víctimas y contribuya a reducir los riesgos de esta nefasta herencia. Mientras esto continúa así, cientos de Valentinas llorarán en los campos salvadoreños las muertes de sus seres queridos.